

REPÚBLICA DE COLOMBIA



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

Santiago de Cali, catorce (14) de agosto de dos mil veinte (2020)

Auto Interlocutorio No. 167

MAGISTRADA PONENTE: ZORANNY CASTILLO OTÁLORA

MEDIO DE CONTROL:	REPARACIÓN DIRECTA
EXPEDIENTE:	76001-33-33-006-2018-00085-01
DEMANDANTE:	DERMA VALDERRAMA HINESTROZA
DEMANDADO:	EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI – EMCALI EICE ESP
ASUNTO	Caducidad del medio de control. Confirma auto apelado que la negó.

Proyecto discutido y aprobado en Sala de Decisión de la fecha. (Acta No. 16).

I. OBJETO DE LA DECISION

Corresponde a la Sala decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra el auto interlocutorio nro. 613 del 30 de agosto de 2019, proferido por el Juzgado Sexto Administrativo de Cali, que negó la excepción de caducidad propuesta por EMCALI EICE ESP.

II. ANTECEDENTES

En ejercicio del medio de control de reparación directa consagrado en el artículo 140 del CPACA, la señora Derma Valderrama Hinestroza a través de apoderado judicial, presentó demanda contra las Empresas Municipales de Cali – EMCALI EICE ESP, para que se declare administrativamente responsable por los perjuicios materiales ocasionados a su vivienda, producto de la filtración de aguas residuales.

III. DE LA PROVIDENCIA APELADA:

Se trata del auto interlocutorio nro. 613 del 30 de agosto de 2019, proferido por el Juzgado Sexto Administrativo de Cali, que negó la excepción de caducidad propuesta con base en las siguientes razones:

“En el presente asunto, la demandante indica que desde el año 2005 se presenta la filtración de aguas residuales en la vivienda ubicada en la calle 19A Oeste No. 46A-41 del barrio Siloe Sector Ileras Camargo de la ciudad de Cali, así mismo que en el año 2013 con ocasión a un cumplimiento de tutela las Empresas Municipales de Cali realizaron los arreglos para contener la filtración de aguas residuales cumpliendo parcialmente, y que para el mes de julio de 2017 nuevamente se volvió a presentar la misma filtración, por lo que se vio en la necesidad de invertir arreglos consistentes en cambiar piso, arreglo de paredes arreglo de techos y cocina en la suma de Diez millones de pesos (10.000.000).

“De lo anterior, el Despacho indica que en la demanda se hace alusión a hechos ocurridos en el mes de julio de 2017, y de ellos deriva la reclamación al menos

de uno de los perjuicios, elementos suficientes para descartar la caducidad del medio de control incoado puesto que la demanda fue presentada en el año 2018, es decir, dentro de los dos años que exige la norma; sin embargo, como en la demanda se mencionan hechos del 2005 y del 2013, generando dudas respecto de su conexidad con los aducidos del año 2017, el Despacho advierte que si bien negará la excepción, ello no será impedimento para que al momento de proferir sentencia se analice nuevamente este aspecto contando con todo el acervo probatorio, para en ese estadio procesal verificar si existe o no caducidad frente a los hechos referidos para los años 2005 y 2013.”

IV. FUNDAMENTOS DEL RECURSO:

El apoderado judicial de Emcali EICE, parte recurrente, expone en síntesis que si bien, hay un tiempo difuso de valoración para la medición del conteo de caducidad de los 2 años, de acuerdo con los hechos de la demanda, el demandante tuvo conocimiento nuevamente de las filtraciones del año 2013 en adelante, de ahí a que haya operado el termino de caducidad, toda vez que la demanda se presentó en el año 2018.

V. CONSIDERACIONES:

5.1 PROBLEMA JURÍDICO

¿En el presente proceso operó el fenómeno de la caducidad sin lugar a dudas, o por el hecho de no encontrar plenamente probada tal circunstancia se puede diferir la decisión sobre la oportunidad de la demanda a la sentencia, como lo hizo el a quo?

1.1.1 Tesis de la Sala.

La Sala confirmará la decisión considerando que es necesario desarrollar el periodo probatorio para determinar la fecha de ocurrencia del daño, el conocimiento que la demandante tuvo del mismo y si éste constituye un daño instantáneo o continuado, situaciones que determinará la ocurrencia o no del fenómeno extintivo y que podrán definirse en la sentencia.

5.2 EL EJERCICIO OPORTUNO DE LA ACCIÓN

El Consejo de Estado, en forma reiterada, ha sostenido que la caducidad se encuentra instituida para garantizar la seguridad jurídica de los sujetos procesales, frente a aquellos eventos en los que determinadas acciones judiciales no se ejercen dentro de un término específico. De ahí, que las partes les correspondan asumir la carga procesal de impulsar el litigio dentro de ese plazo, que es fijado por la ley y, si no se hace en tiempo pierden la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su derecho¹.

Además de lo expuesto, el fenómeno procesal analizado debe ser tenido en cuenta como una herramienta que tiene su razón de ser en la seguridad y en la temporalidad, pues busca que el interesado en acudir a la administración de justicia realice todas las gestiones necesarias para tal fin, dentro de los términos

¹ Consejo de Estado, Sección Tercera, C.P.: Mauricio Fajardo Gómez. 6 de agosto de 2009. Expediente: 36.834 (auto). Reiterado en Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “A”. C.P.: Mauricio Fajardo Gómez. Radicación: 250002326000199902635 – 01 (27588). 26 de febrero de 2014.

establecidos por la ley, y que la discusión esté limitada y no sometida indefinidamente a la voluntad de los accionantes.

Cabe resaltar que la referida figura no admite suspensión, salvo que se presente una solicitud de conciliación extrajudicial en derecho, de acuerdo con lo previsto en las Leyes 446 de 1998 y 640 de 2001; tampoco admite renuncia y de encontrarse probada, debe ser declarada de oficio por el juez.

5.3 CADUCIDAD – MOMENTOS EN LOS CUALES SE INICIA EL COMPUTO

Para comenzar, el plazo para incoar el medio de control de Reparación Directa, conforme al literal (i) del numeral 2º del artículo 164 del CPACA, es: “... la demanda deberá presentarse dentro del término de **dos (2) años**, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia **de la acción u omisión causante del daño**, o de cuando **el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo** si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia.”

El Consejo de Estado en sentencia del 27 de marzo de 2014² toma como punto de referencia el literal i) del numeral 2º del artículo 164 del CPACA en el siguiente sentido:

“El propósito esencial de la caducidad es evitar que las diversas situaciones generadoras de responsabilidad se extiendan de manera indefinida en el tiempo, brindando así seguridad jurídica al convertirlas en situaciones jurídicas consolidadas. (...) la demanda de reparación directa caducará, por regla general, al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia. (...) en algunos casos resulta necesario identificar el momento preciso en el cual se configura o consolida el daño para poder computar el término de caducidad del medio de control, situación que reviste de complejidad si se tiene en cuenta que en relación con el tiempo no todos los daños pueden ser verificados en un momento exacto, pues es posible que sus efectos se prolonguen en el tiempo o incluso se consoliden en una etapa posterior a la fecha de ocurrencia del hecho dañoso”.

La norma y el criterio jurisprudencial hacen referencia a dos momentos para el inicio del cómputo de caducidad: i) la ocurrencia de la acción u omisión administrativa causante del daño y ii) el conocimiento del daño por parte del afectado, caso en el que deberá probar la imposibilidad de su conocimiento previo.

De otra parte, ha sido enfática en establecer que existen daños inmediatos y otros continuados, además, diferencia entre éstos últimos y los efectos de un daño instantáneo que perdura en el tiempo.

“...la Sala se remite a la jurisprudencia en torno a la forma como debe operar el conteo del término de caducidad de la acción de reparación directa por causa del daño que se origina en una omisión administrativa. Al punto ha dicho esta Corporación:

«En relación con las omisiones, el término de caducidad de la acción debe contarse desde el momento en que se incumpla la obligación legal,

²Sección Tercera, sentencia del 27 de marzo de 2014, Consejero Ponente Dr. Ramiro de Jesús Pazos Guerrero.

siempre que ese incumplimiento coincida con la producción del daño, pues en caso contrario, el término de caducidad deberá contarse a partir de dicha existencia o manifestación fáctica del mismo, ya que ésta es la primera condición para la procedencia de la acción reparatoria.

Aunque la omisión se mantenga en el tiempo o el daño sea permanente, dicho término no se extiende de manera indeterminada porque la misma ley ha previsto que el término de caducidad es de dos años contados a partir de la omisión²⁰. [Subraya la Sala]».

También puede ocurrir que el daño no sea de aquellos que se producen de manera instantánea, sino de los que se prolongan en el tiempo, pero ello no implica que el término de caducidad se postergue indefinidamente, ya que se afectaría la seguridad jurídica, ahora bien, otro asunto resulta cuando el demandante solo tuvo conocimiento del daño, tiempo después de la ocurrencia de la omisión, ya que en esa situación, en aplicación del principio de prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, el término deberá contarse a partir de la fecha en que la persona tuvo conocimiento del daño, evento en el que aplica la regla mencionada sobre el conocimiento posterior del daño²¹.

En estos eventos, se debe diferenciar el daño continuado o de tracto sucesivo, del hecho dañoso y de los daños de naturaleza inmediata que se agrava o cuyos efectos o perjuicios se prolongan en el tiempo, comoquiera que en estos casos, el menoscabo se concreta *ipso facto* en un momento determinado, y es a partir del hecho dañoso que lo causa o desde que se conoció el daño -se reitera, en los eventos de que el afectado no lo hubiera podido advertir al momento en que se produjo el hecho dañoso-, que el término de caducidad debe empezar a computarse²². **No deben confundirse los daños continuados con los hechos dañosos que se extienden temporalmente, de modo que la excepción a la regla de la caducidad prevista para aquéllos no le resulta aplicable a éstos.** Así lo ha considerado esta Corporación²³, en los siguientes términos:

“el plazo para demandar debe contabilizarse a partir del día siguiente en que tiene lugar el hecho violatorio a partir del cual se puede aducir como constituida la responsabilidad extracontractual del Estado -ver párrafo 11.2-, y no desde el momento en que aquél finaliza en los casos en que ese acontecimiento dañino se mantiene en el tiempo, lo que de ninguna manera ha sido interpretado como plausible por esta Corporación.

11.15 Asimismo, se debe tener en cuenta que sostener lo contrario podría conllevar a que se difiriera indefinidamente la configuración de la caducidad cuando la actuación positiva o negativa del aparato estatal se prolonga de manera indeterminada en el tiempo, como en varias ocasiones ocurre con las omisiones del Estado, a pesar de que los mismos daños por los que se puede demandar se hubiesen configurado en un momento concreto y fueran conocidos por la víctima, lo cual contravendría la misma seguridad jurídica que pretende garantizar dicho instituto procesal. [...]

En consecuencia, sin perder de vista que la continuidad del hecho dañoso no se puede confundir con los detrimentos que por su naturaleza se extienden en el tiempo (...) es evidente que al Tribunal de primera instancia le resultaba inviable contabilizar la caducidad del derecho de acceder a la administración de justicia a partir del momento en que se logró reubicar a las personas invasoras del espacio público correspondiente, es decir, desde el momento en que finalizó el actuar dañino consistente en la omisión del Estado”³

3 C.E. exp. (64337), auto 31-1-20, C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas.

Así, al tenor del artículo 164 del CPCA, es posible que el daño posterior no pueda ser conocido por el interesado al momento de su nacimiento, sino solamente tiempo después, o que éste no se consuma en un momento exacto sino que ocurra de manera constante y perdure en el tiempo, situaciones todas, que modifican el punto de partida del cómputo de la caducidad.

5.4 CASO CONCRETO

En el caso concreto manifiesta la parte accionante que: i) desde el año 2005 se viene presentando una filtración de aguas residuales en su residencia, ubicada en la calle 19A Oeste # 46A-41, en el barrio Siloe; ii) que el 27 de mayo de 2013, por tutela se ordenó a Emcali EICE realizar los arreglos para contener las aguas residuales, lo cual cumplieron parcialmente; iii) que en el mes de julio de 2017, se volvió a presentar la misma filtración de aguas en la vivienda, por lo que se vio en la necesidad de invertir en arreglos por la suma de \$10.000.000 de pesos, no obstante, las filtraciones han persistido debido a que la demandada no realizó los correctivos necesarios.

Del material probatorio se logra demostrar lo siguiente:

Obra a folio 199 del expediente, respuesta a derecho de petición suscrita por la Coordinadora de Atención Escrita – Dirección Atención al Cliente de la entidad demandada, del 26 de abril de 2019, donde señala:

“Al verificar nuestro sistema de información, se observan las siguientes ordenes ejecutadas en terreno por parte del área operativa del acueducto en relación al predio ubicado en la Calle 19A Oeste Nro. 46ª-41 el cual tiene asignado número de suscriptor 339564:

*“Verificación de daño de acometida de acueducto orden No. 25244949 del 2 de febrero de 2016.
 (“..”)*

*“Verificación de daño de acometida de acueducto orden No. 25520166 del 24 de febrero de 2016.
 (“..”)*

*“Obras complementarias tapar y recoger _ acometida orden No. 25550983 del 17 de agosto de 2016.
 (“..”)*

Más adelante se lee: *Así mismo, se observa que el usuario del contrato No. 339564, presentó derecho de petición el 19 de octubre de 2017, mediante la cual manifestaba”... desde el año 2005, se ha presentado en su vivienda de la Calle 19A Oeste No. 46A-41 del barrio SILOE, Sector Lleras Camargo, una filtración de aguas residuales, cuyo mantenimiento corresponde a las Empresas Municipales de Cali EMALI EICE ESP, por lo que solicitaba la reparación integralmente de los daños causados a mi propiedad...”*

A folio 2 obra derecho de petición elevado por la actora contra la entidad demandada, del 19 de octubre de 2017, en el cual solicita la reparación integral de los daños causados a su propiedad, tasados en la suma de \$10.000.000 de pesos, por concepto de arreglos a pisos, paredes, techos y cocina, como consecuencia de la filtración de las aguas residuales.

Con fundamento en los hechos de la demanda y el material probatorio, para la Sala es evidente que, en este momento procesal, al inicio del trámite y sin agotar el

periodo probatorio, no existen los elementos necesarios y suficientes para determinar ni la naturaleza del daño, es decir si este puede catalogarse como inmediato o continuado y menos aún para fijar a ciencia cierta la fecha exacta en que debe entenderse que la parte actora conoció o debió conocer de su ocurrencia.

Por lo anterior, se avala la decisión del a quo que negó declarar probada la excepción y se confirmará la decisión proferida por el Juzgado Sexto Administrativo de Cali, el 30 de agosto de 2019.

En consecuencia, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,

RESUELVE:

PRIMERO.CONFIRMAR el auto interlocutorio nro. 613 del 30 de agosto de 2019, proferido por el Juzgado Sexto Administrativo de Cali, por medio del cual negó la excepción de caducidad, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO. Ejecutoriada la presente providencia, **DEVUÉLVASE** el expediente al juzgado de origen para lo de su cargo.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,



ZORANNY CASTILLO OTALORA
Magistrada



ANA MARGOTH CHAMORRO BENAVIDES
Magistrada



VÍCTOR ADOLFO HERNÁNDEZ DÍAZ
Magistrado